

**EXPEDIENTE: IEEM/SE/AE/14/2014**

Toluca de Lerdo, México, a once de febrero de dos mil quince.

**VISTOS** para resolver los autos que integran el expediente del asunto especial número **IEEM/SE/AE/14/2014**, formado con motivo del posible incumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria para la integración de las Juntas Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral en curso; por parte de la **C. Leonor Aguilar Quintero**, integrante número tres de la Lista de Reserva, correspondiente a la Junta Municipal número 66, con sede en Otumba, México; y

**R E S U L T A N D O**

1. En sesión extraordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aprobó el acuerdo número **IEEM/CG/16/2014**, relativo al Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015, el cual contiene los lineamientos para la designación de los vocales de dichos órganos, así como la convocatoria respectiva.
2. La convocatoria señalada en el resultando anterior, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, "Gaceta del Gobierno" en fecha once de agosto del año dos mil catorce, publicación que se realizó en los estrados del Instituto y en la página electrónica oficial y se mantuvo a partir de la fecha citada, hasta el treinta y uno de octubre de esa anualidad.
3. Entre el dieciocho de agosto y el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se desarrolló, en sus distintas fases, el procedimiento para la integración de las propuestas de los Vocales Distritales y Municipales.
4. El veintinueve de octubre del dos mil catorce, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto, el oficio sin número fechado el día próximo anterior, suscrito por el Lic. Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente de este Consejo General, y los CC. Dra. María Guadalupe González Jordan, Mtra. Palmira Tapia Palacios, y, Dr. Gabriel Corona Armenta, Consejeras Electorales y Consejero Electoral, respectivamente, de este órgano de dirección, a través del cual dichos funcionarios solicitaron al Secretario Ejecutivo girara oficio de colaboración al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que informara cuáles de los aspirantes a Vocales Distritales y Municipales que serían designados, pudieran tener relación laboral con los ayuntamientos de los municipios en los que se encontraban participando.

5. En cumplimiento a dicha solicitud, mediante oficio número IEEM/SE/0810/2014, de fecha veintinueve de octubre del dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo solicitó al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, la información indicada en el resultando que antecede.

6. En sesión extraordinaria de fecha siete de noviembre del año próximo pasado, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante acuerdo número IEEM/CG/68/2014, designó a los Vocales de las Juntas Municipales para el Proceso Electoral 2014-2015, así como a los integrantes de la Lista de Reserva, y entre ellos, quedó nombrada la C. Leonor Aguilar Quintero, como integrante número 3 de la referida lista, correspondiente a la Junta Municipal número 66, con sede en Otumba, México.

7. El día cinco de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio número OSFEM/UAJ/SCA/DAL/2084/2014, fechado el treinta de octubre de la misma anualidad, a través del cual el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, hizo llegar la información que se obtuvo de la búsqueda en los archivos de la nómina remitida por las entidades fiscalizables, con relación a los aspirantes designados como vocales que podían tener relación laboral con los ayuntamientos, con corte al mes de septiembre del año dos mil catorce. No obstante, el referido funcionario también señaló que la entidad a su cargo no podía pronunciarse sobre la veracidad de dicha información, toda vez que la misma se obtenía de documentos digitalizados y no había sido confrontada con los originales respectivos, los cuales obran en poder de las entidades fiscalizadas.

8. En vista de lo anterior, en esa misma fecha, el Presidente y los Consejeros Electorales señalados en el resultando 4, solicitaron al Secretario Ejecutivo girara oficio de colaboración a los ayuntamientos correspondientes para que informaran sobre la posible existencia de relación laboral entre estos últimos y los aspirantes cuyos nombres se acompañaban a la solicitud de mérito y remitieran copias certificadas de la documentación respectiva.

9. El Secretario Ejecutivo del Instituto dio cumplimiento a la solicitud anterior, entre otros, a través del oficio número IEEM/SE/1691/2014, de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, por el que requirió al Ayuntamiento de Otumba, México, informara si la C. Leonor Aguilar Quintero, laboró o labora actualmente para dicha autoridad y, en su caso, el tiempo de duración de la relación de trabajo y el cargo o puesto que desempeñaba, acompañando los documentos que corroboren su dicho.

10. Por oficio número DA/OTU/305/11/2014, recibido el dieciocho de noviembre de dos mil catorce en la Oficialía de Partes del Instituto, el C. Héctor Manuel Orozco Espinoza, Director de Administración del Ayuntamiento Constitucional de Otumba, México, informó a esta Secretaría que la C. Leonor Aguilar Quintero, se encuentra

como trabajadora adscrita a la Delegación de la Comunidad Santiago Tolman, del Comité de Agua del mismo poblado desde el dieciséis de junio de dos mil catorce, como Secretaria.

11. Por acuerdo de la Secretaría Ejecutiva emitido el uno de diciembre de dos mil catorce, se ordenó que con las constancias atinentes, se integrara el expediente del asunto especial número **IEEM/SE/AE/14/2014**, así como que se diera vista al ciudadano cuya designación se cuestiona, para que en un plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación, desahogara por escrito su garantía de audiencia, manifestando lo que a su derecho conviniera y ofreciendo las pruebas documentales que para esos efectos estimara convenientes.

12. El día dos de diciembre del año próximo pasado, se le notificó personalmente a la C. Leonor Aguilar Quintero el acuerdo señalado en el resultando anterior, así como los anexos correspondientes.

13. Mediante acuerdo de fecha nueve de diciembre del año dos mil catorce, en virtud de que la C. Leonor Aguilar Quintero, no compareció a su desahogo de garantía de audiencia, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos mediante acuerdo de fecha uno de diciembre del año próximo pasado, teniendo por satisfecho su derecho y se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

14. La Presidencia de la Comisión Temporal de Vinculación con Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, presentó ante sus integrantes el presente proyecto de resolución, ordenando la propia Comisión su remisión al Consejo General, para su aprobación definitiva, en su caso.

## **CONSIDERANDO**

**PRIMERO Competencia.** Con fundamento en los artículos 174 fracción I, 175 y 185 fracción VI del Código Electoral del Estado de México; en el apartado "5. Lineamientos para la designación de vocales" del Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015; en la Bases Séptima párrafo segundo y Décima primera párrafo tercero de la Convocatoria respectiva; y en el punto TERCERO del acuerdo número **IEEM/CG/68/2014**, este Consejo General se encuentra facultado para designar a los vocales de dichos órganos desconcentrados e integrantes de las listas de reserva correspondientes, y en su caso, para sustituir a los primeros y remover a los segundos; por lo tanto, es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata del procedimiento instaurado con motivo de la posible remoción de una ciudadana incluida en la lista de reserva para la

integración de las juntas municipales del Instituto, por su presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria de mérito.

**SEGUNDO. Estudio de fondo.** Previo al estudio de la litis, es conveniente destacar las siguientes consideraciones vinculadas al sentido que habrá de darse a la presente resolución:

**a) Marco normativo.**

La reforma en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, introdujo múltiples adecuaciones al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo para el presente caso, tener en consideración las acaecidas al artículo 1º constitucional.

De acuerdo con el párrafo primero de dicho precepto, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ella misma establece.

Por su parte, el párrafo segundo del artículo bajo análisis establece, que las normas concernientes a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, siempre a favor de que a las personas se conceda la mayor protección. En consonancia con ello, el párrafo tercero ordena a todas las autoridades, acorde a sus competencias, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a la vez que les impone obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.

Así, es posible sostener que los párrafos segundo y tercero del artículo 1º constitucional, se instituyen como una norma guía para todas las autoridades del país, a efecto de que éstas velen en todo momento por los derechos humanos, adoptando las acciones más adecuadas para ello, conforme a sus respectivas atribuciones.

En la especie, los artículos 35, fracción VI, de la Carta Magna, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen el derecho fundamental a ser nombrado para cualquier empleo o comisión público, en condiciones de igualdad, teniendo las calidades que establezca la ley. Tal derecho incluye el particular de acceso a los órganos electorales, cuya tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte de éstos, ya sean de máxima dirección —es decir de carácter central— o desconcentrados, tanto de las autoridades

administrativas como de las jurisdiccionales de la materia, según ha razonado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 11/2010, publicada en las páginas 27 y 28 de la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 3, número 6, correspondiente a 2010, cuyos rubro y texto se citan a continuación:

**INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.**—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17; 35, fracción II; 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos segundo, cuarto y octavo, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos d) y e); 195, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a fin de dar efectividad al sistema integral de medios de impugnación en materia electoral, se advierte que el derecho ciudadano a poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, incluye aquellos relacionados con la función electoral, es decir, su tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte como integrantes de los órganos, de máxima dirección o desconcentrados, de las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales estatales.

**Cuarta Época:**

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-4/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz.—10 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Luis Alberto Balderas Fernández.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1/2010.—Actor: Jorge Luis Benito Guerrero.—Autoridad responsable: Dirección de Organización Electoral de la Dirección General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Carlos Vargas Baca.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-6/2010.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Uninstitucional del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos, con el voto concurrente del Magistrado Flavio Galván Rivera.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.*

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil diez, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Del mismo modo, la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país, ha sostenido reiteradamente que los derechos contenidos en el artículo 35, de la Carta Magna son de base constitucional y de configuración legal, y que no son absolutos ni ilimitados, sino que pueden estar sujetos a ciertas y determinadas restricciones previstas en la ley, pero siempre que éstas no sean irrazonables, desproporcionadas, caprichosas ni arbitrarias, y que no afecten su contenido esencial. Dicho criterio deriva de las resoluciones recaídas a los expedientes SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-128/2001, acumulados; SUP-

JDC-494/2012, SUP-JDC-3234/2012, SM-II-JDC-011/2000, SM-II-JDC-096/2000 y SM-II-JDC-097/2000, por mencionar sólo algunas.

En consecuencia, de la interpretación de los artículos 35 fracción VI de la Constitución General de la República, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con relación a los párrafos segundo y tercero de la misma Ley Suprema, se desprende que las autoridades en la materia tienen el deber jurídico de respetar y hacer vigentes los derechos humanos de carácter político-electoral, entre los que se encuentra el de acceso a los cargos públicos electorales, mediante las acciones que fuesen necesarias para dar vigencia o efectividad a tales derechos, pero también absteniéndose de realizar cualquier acto que los vulnere o haga los nugatorios de cualquier manera.

Ahora bien, en términos de los artículos 41, Base V, Apartados A y C, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 168, 169 párrafo primero, 173, 174, 178, 185, fracciones I y VI, 205, 206, 207, 208, fracción I, 209, 214, 215, 216, 217, fracción I y 218, del código comicial local, el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los Procesos Electorales en la entidad. En el ejercicio de dicha función, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo. Además, el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del código de la materia.

Este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, de promover la cultura política democrática, y velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades de la institución.

Dicho órgano tiene entre sus atribuciones la de expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento del Instituto; y la de designar a los vocales de las Juntas Distritales y Municipales, de entre las propuestas que al efecto presente la Junta General y conforme a los lineamientos que emita el propio órgano superior de dirección.

Señalado lo anterior, es conveniente precisar que, las Juntas Distritales y Municipales son los órganos desconcentrados de carácter temporal del Instituto, a

través de los cuales ejerce éste sus funciones en cada uno de los distritos electorales locales y cada uno de los municipios de la entidad; por tanto, intervienen en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos comiciales en cada una de sus respectivas demarcaciones, mediante las atribuciones que la ley y la normatividad reglamentaria les conceden. Dichos órganos se integran por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de Capacitación, quienes también forman parte del Consejo Distrital o Municipal respectivo; el primero de esos funcionarios en calidad de presidente y los dos restantes con el carácter de secretario, ya sea de manera habitual en el caso del Vocal de Organización, o como suplente, en tratándose del Vocal de Capacitación. No existe disposición alguna en el Código Electoral que prevea expresamente los requisitos para ser Vocal de las Juntas Distritales y Municipales. Sin embargo, dicho ordenamiento sí señala los requisitos que deben cumplir los miembros de los consejos respectivos, que serán los mismos que deben satisfacer los consejeros del Consejo General del Instituto, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá referido al distrito o al municipio de que se trate, y el de título profesional que no será necesario.

En ese contexto, este Consejo General de conformidad con el artículo 185, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, puede expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones que sean necesarias para el buen funcionamiento, debiendo respetar el principio de legalidad y de supremacía constitucional, para que las normas que emita sean en estricto cumplimiento de la ley, estando subordinados a ésta, entre ellas las relacionadas con las que deban ser aplicables para la designación de Vocales Distritales y Municipales.

Con base en dicha facultad, este Consejo General, en su sesión extraordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil catorce, aprobó el acuerdo número **IEEM/CG/16/2014**, denominado "Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2014-2015", el cual contiene los lineamientos en mención, el procedimiento para designar las vocalías de los referidos órganos desconcentrados, y la convocatoria dirigida a los ciudadanos que aspiraran a ocupar esos cargos.

Dicha convocatoria señala, entre otras, los requisitos que debían cumplir los ciudadanos interesados en participar, quedando incluidos en sus Bases Primera y Tercera, fracción XIII, las cuales establecen:

**"Primera. De los participantes.**

Podrán participar todos los ciudadanos del Estado de México, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, inscritos en el Padrón Electoral del Estado de México, con residencia en el municipio y distrito electoral local donde pretenden prestar sus servicios, **que no cuenten con empleo remunerado alguno al día de su designación y que estén interesados en ocupar un puesto eventual de tiempo**

**completo**, con funciones directivas en alguna de las juntas distritales y municipales del Instituto electoral del Estado de México; para atender todo lo relativo al Proceso Electoral 2014-2015, considerado lo establecido en el artículo 413 del Código Electoral del estado de México.

**Tercera. De los requisitos.**

De conformidad con lo dispuesto, los ciudadanos interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos:

...  
XIII. No tener relación laboral con la administración municipal correspondiente a su ámbito territorial por el cual compite, al momento de la publicación de la presente convocatoria.  
..."

De los requisitos en cita se derivan dos condicionantes para tenerlos por cumplidos, no contar con un empleo remunerado alguno al día de la designación y no tener una relación laboral con los municipios al momento de la publicación de la convocatoria respectiva.

Sobre dichas exigencias el Tribunal Electoral del Estado de México, se pronunció mediante las resoluciones recaídas a los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Local, identificadas con las claves JDCL/5/2014, RA/9/2014, JDCL/43/2014 y JDCL/44/2014, cuyos criterios sirven de apoyo y resultan orientadores para la resolución del presente asunto.

En esencia el órgano jurisdiccional electoral sostuvo que al ser emitidos el Programa General y la convocatoria atinente, en ejercicio de la facultad reglamentaria que le concede el artículo 185, fracción I, del código de la materia, el Consejo General del Instituto estaba compelido a respetar los principios de reserva de ley y supremacía constitucional.

En este orden, señaló que el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 2º de la Constitución General de la República establece un principio de reserva de ley, según el cual los requisitos que deben cumplir los ciudadanos que aspiren a ser consejeros de los órganos administrativos electorales locales, deben estar previstos en un ordenamiento que tenga el rango de ley; asimismo, que el artículo 11 de la Constitución particular del Estado de México también establece ese principio de reserva, en cuanto que la organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México, serán determinadas por la ley respectiva. Así, a efecto de salvaguardar el citado principio de reserva, el artículo 178 del Código comicial local establece los requisitos que deben reunir los consejeros del Consejo General del Instituto, mientras que el diverso numeral 218, señala que los consejeros de los Consejos Municipales, deberán satisfacer esos mismos requisitos, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá referido al municipio de que se trate, y el de título profesional, que no será necesario.



De este modo, la máxima instancia jurisdiccional electoral de la entidad, con apoyo en el criterio que ella misma sostuvo en el diverso juicio ciudadano **JDCL/1/2014**, consideró que los vocales ejecutivo, de organización electoral y de capacitación de las Juntas Municipales, también forman parte de los consejos respectivos, con los cargos que se mencionan en párrafos anteriores, por lo que los aspirantes a ocupar las vocalías deben cumplir los requisitos contenidos en el citado artículo 178, conforme lo señala el diverso 218.

Luego, al no estar previsto en dichos preceptos los requisitos consignados en las Bases Primera y Tercera fracción XIII de la multialudada convocatoria, el Tribunal Electoral local concluyó que dichos requisitos son ilegales, pues no tienen sustento jurídico alguno para su exigencia, por lo que este Consejo General del Instituto se extralimitó en el ejercicio de su facultad reglamentaria al incluirlos en dicha convocatoria. Estimando que la ilegalidad de los requisitos en estudio deriva también de que contienen por una parte una limitante al empleo remunerado y por otra, una restricción absoluta con respecto a la relación laboral entre el aspirante a vocal y la administración pública municipal, esto es, con independencia de la clase y grado de esa relación.

A mayor abundamiento, respecto a la condición contenida en la Base Primera, *"...no contar con empleo remunerado alguno al día de su designación"*, en la sentencia emitida en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave **JDCL/43/2014**, específicamente se razonó como ya se dijo que era ilegal, y que para el estudio de dicho requisito deben destacarse la existencia de dos momentos en la integración de los órganos desconcentrados; el primero de ellos, se presenta con la designación de los ciudadanos que participaron como vocales en las Juntas Municipales y el segundo se presenta durante el tiempo que válidamente tiene vigencia el desempeño de las funciones inherentes al nombramiento que ostentarán como servidores públicos electorales.

Lo anterior, se sustenta en que durante el tiempo de su nombramiento como consejeros electorales no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo las relacionadas a las actividades docentes, científicas y culturales, siempre y cuando no sean remuneradas. Lo cual, en criterio del órgano jurisdiccional local, debe ser entendido como un momento diverso al de su designación, lo anterior es así, ya que de considerar lo contrario, sería como restringir al interesado en participar en el proceso electivo que nos ocupa, su derecho fundamental al trabajo remunerado aun antes de saber si ocupará el diverso para el que concursa, por lo cual consideraron que lo previsto en el artículo antes señalado deba entenderse como un requisito negativo *a priori* al desempeño del cargo razón por la cual dicho precepto no es aplicable para los efectos pretendidos por el actor.

Por otra parte, en cuanto a la fracción XIII de la Base Tercera “No tener relación laboral con la administración municipal correspondiente a su ámbito territorial por el cual compite, al momento de la publicación de la presente convocatoria”, en las sentencias emitidas en los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales JDCL/5/2014 y JDCL/44/2014 y el Recurso de Apelación número RA/9/2014, se declaró ilegal porque contiene una restricción absoluta respecto de la relación laboral entre el aspirante a vocal y administración pública municipal; esto con independencia de clase y grado de relación laboral existente entre el aspirante y la administración pública municipal, y por este simple hecho el ciudadano no podría participar en el proceso de selección de Vocales Distritales y Municipales.

Así las cosas, con base en los criterios sustentados por el Tribunal Electoral local es dable concluir que los requisitos establecidos en la Base Primera y la fracción XIII de la Base Tercera de la Convocatoria para la designación de vocales de las Juntas Distritales y Municipales, son ilegales y, por tanto, no son exigibles a los ciudadanos que eventualmente lleguen a ocupar esos cargos, ya que no derivan de un ordenamiento con rango de ley, y en esta virtud, contravienen el principio de reserva legal implícito en la facultad reglamentaria que el artículo 185, fracción I, del código de la materia concede a este Consejo General del Instituto, además de que el último de los requisitos en mención establece una restricción absoluta en perjuicio de los interesados, al no especificar la clase o el grado de la relación laboral que deben tener para incurrir en el incumplimiento de dicho requisito.

Lo anterior se robustece, si se considera que la obligación de respetar el principio de reserva legal en el tema que nos ocupa, deriva de los artículos 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como del artículo 29, fracción II, de la Constitución particular del Estado de México; como queda evidenciado en párrafos anteriores.

Finalmente, dicha interpretación es también la que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 1º constitucional, ya que la estricta legalidad de los requisitos exigidos a los vocales, es la mejor garantía del respeto al derecho fundamental de acceso a los cargos públicos electorales, previsto en los preceptos apuntados, al reducir las limitaciones a ese derecho, a las previstas taxativamente en la norma legal.

#### **b) Constancias que obran en el expediente.**

Establecido lo anterior, es procedente el análisis del acervo probatorio contenido en el presente expediente, para lo cual es conveniente precisar que se encuentran agregadas las siguientes constancias:

1. El acuse de recibo original del oficio número IEEM/SE/1691/2014, del trece de noviembre del año dos mil catorce, dirigido al C. Silvestre Vicuña Cortés, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Otumba, México.
2. Oficio número DA/OTU/305/11/2014, del catorce de noviembre de dos mil catorce, recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto, el dieciocho de noviembre del presente año, suscrito por el C. Héctor Manuel Orozco Espinoza, Director de Administración del Ayuntamiento de Otumba, México, acompañado de:
3. Impresión del alta ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), a nombre de la C. Leonor Aguilar Quintero, señalando como fecha de movimiento, el dieciséis de junio de dos mil catorce.

Con base en los artículos 435, fracción I, 436, fracción I, y 437, párrafos primero y segundo del Código Electoral del Estado de México, las pruebas marcadas con el número 2, son documentales públicas, por lo que salvo prueba en contrario, tendrán pleno valor probatorio, respecto a su autenticidad y a la veracidad de su contenido.

Por otra parte, en términos del artículo 438 del ordenamiento en consulta, la constancia marcada con el número 3, tendrá únicamente valor indiciario, al haberse exhibido en copia fotostática simple. Lo anterior es así, porque este tipo de reproducciones se obtienen mediante procedimientos técnicos y científicos que permiten lograr, no sólo la copia, sino la composición, arreglo o alteración de los originales reproducidos, por lo que, por sí mismas, no pueden generar certeza sobre su autenticidad, al ser posible que no correspondan al contenido fiel del documento o documentos de los que se toman.

Así, de las probanzas anteriores se desprende que en fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, la C. Leonor Aguilar Quintero, ingresó a trabajar en el Ayuntamiento de Otumba, México; desempeñando el cargo de Secretaria adscrita a la Delegación de la Comunidad de Santiago Tolman y del Comité de Agua del mismo poblado; continuando activa en el cargo en el referido lugar, por lo menos hasta la fecha en que dio respuesta la autoridad municipal.

Por lo que, con independencia al incumplimiento de los requisitos contenidos en la Base Primera y Base Tercera Fracción XIII, de la convocatoria, este Consejo General considera que analizados los precedentes y criterios orientadores reiterados por el órgano jurisdiccional local, es pertinente arribar a una nueva reflexión y dejar subsistente el lugar que ocupa en la Lista de Reserva la C. Leonor Aguilar Quintero, aún y cuando actualmente se encuentra laborando en el Ayuntamiento de Otumba, México, la anterior conclusión se sustenta en que las hipótesis normativas analizadas, han sido declaradas en diversos asuntos, ilegales

y excesivas de la facultad reglamentaria que tiene este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

Aunado a que adecuarse a dichos criterios garantiza el derecho político electoral de la ciudadana objetada de integrar autoridades electorales, correlacionado con el artículo 35, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a todos los ciudadanos mexicanos el derecho de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, máxime que el ciudadano designado ha demostrado reunir las cualidades que establece la ley.

A mayor abundamiento, cabe destacar que si bien el acuerdo por el que se realiza la designación de los Vocales, también se aprueba la Lista de Reserva, la cual contiene nombres de ciudadanas y ciudadanos que no son designados y que podrán ejercer el cargo de Vocales únicamente en el caso de falta o ante la renuncia de los Vocales designados, este acontecimiento, lo convierte en un hecho casuístico que puede o no ocurrir, más porque depende de la ubicación en la que se encuentre el ciudadano en la Lista de Reserva.

Por lo tanto, a las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en Lista de Reserva, en lo subsecuente no sería posible aplicarles dichas disposiciones, toda vez que las condiciones temporales que se encuentran en las hipótesis normativas en estudio, restringen de manera temporal no contar con un empleo remunerado, ya sea al día de la designación, o en su caso, dentro de la administración pública municipal, situación que es conculcatoria de derechos, en atención a la imposibilidad por parte del Instituto Electoral de proveerlos de remuneración alguna, considerando que estos, no están formalmente integrados en el funcionamiento de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral, por lo que no son funcionarios, ni servidores públicos en ejercicio de un cargo, por lo que no reciben remuneración alguna.

En consecuencia, la situación bajo la cual permanecen, es incierta, pues únicamente podrán ejercer el cargo como Vocal, una vez que falte un integrante designado en la Junta Electoral correspondiente, lo que significa que continúa bajo una condición casuística que puede o no presentarse.

Con base en lo expuesto, este Consejo General considera que la ciudadana objetada debe continuar en la Lista de Reserva de Vocales de la Junta Municipal número 66, con sede en Otumba, México, y únicamente para el caso de llegar a ser designada Vocal, deberá acreditar, en el plazo perentorio que establezca este Consejo General no contar con un empleo distinto que le impida ejercer el cargo eventual de tiempo completo para el que en su momento concursó.

Visto lo anterior y atento a las constancias respectivas, con fundamento en los artículos 174 fracción I, 175 y 185 fracción VI del Código Electoral del Estado de México; en el apartado "5. Lineamientos para la designación de vocales" del

Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015; en la Bases Séptima párrafo segundo y Décima primera párrafo tercero de la Convocatoria respectiva; y en el punto TERCERO del acuerdo número **IEEM/CG/68/2014**, este órgano superior de dirección.

## **RESUELVE**

**PRIMERO.** Queda subsistente el nombramiento de la C. Leonor Aguilar Quintero, como integrante número tres de Lista de Reserva de la Junta Municipal número 66, con sede en Otumba, México, en términos de lo razonado en el considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** No ha lugar a acordar la exclusión de la C. Leonor Aguilar Quintero, de la Lista de Reserva de la Junta Municipal número 66, con sede en Otumba, México, en atención a las consideraciones expresadas en el considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

**NOTIFÍQUESE** por estrados la presente resolución por conducto de la Secretaría Ejecutiva.

**ARCHÍVESE** en su oportunidad el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los CC. Consejeros Integrantes presentes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria de fecha once de febrero del año dos mil quince.

**"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"**

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ**

**EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL  
M. EN. A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL**

VMCT/avm/jldle

IEEM/SE/AE/14/2014